

# 3

## El complot de los patrones

El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura para impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares.

*Tercer mensaje presidencial al  
Parlamento, de Salvador Allende,  
21 de mayo de 1973.*

El 15 de agosto de 1971, el diario «La Nación» de Santiago traía una entrevista con un obrero de la industria textil Yarur S.A., una de las empresas monopólicas de esa rama, corazón del imperio, oligárquico de los Yarur, grupo dueño del Banco de Crédito e Inversiones; industrias químicas, textiles y de alimentos; y empresas de distribución y de finanzas, en sociedad con el grupo norteamericano Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank. La industria había sido requisada por el Gobierno para cumplir «la meta anual» en ese aspecto, que señalaba la expropiación de las empresas del cobre, hierro, salitre, de la banca privada y de la industria textil y del cemento, además de algunas empresas de distribución. La Contraloría General de la República, bajo presión del grupo Yarur y del Chase Manhattan Bank, había dicho que «la requisición es ilegal».

Pues bien, el obrero de la industria Yarur S.A. respondía lo siguiente:

«No nos importa si la requisición es legal o no, nosotros no entregaremos la industria. Ni la Contraloría ni la Corte Suprema nos harán volver atrás. Los trabajadores tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y no estamos dispuestos a seguir siendo

explotados. Una cosa es lo que puedan decir los tribunales y otra muy distinta lo que hagamos nosotros... El Gobierno popular nos ha dado la posibilidad de tomar decisiones en la empresa que trabajamos. Nuestro objetivo es seguir adelante, incluso pasando por sobre la legalidad.»

Eso reflejaba un estado de ánimo popular muy definido.

En la primera semana de septiembre del mismo año, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz (ingeniero comercial, 40 años, empresario-gerente en la industria metalúrgica), leía en sesión de directorio un «alarmante informe» del servicio de estadísticas del cuerpo de Carabineros que señalaba cómo los obreros y campesinos estaban «barriendo» la «legalidad» y ocupaban predios agrícolas e industrias para hacer valer sus derechos salariales y, en algunos casos, para obligar al Gobierno a expropiar monopolios con cuyos dueños tenían acuerdo verbal de no expropiación. Para establecer una referencia, el informe apuntaba:

En el año 1969, hubo 118 ocupaciones de predios agrícolas; en 1970, último año de la Administración Frei, la cifra subió a 365 ocupaciones; pero ahora, en los primeros ocho meses de 1971, los campesinos han ocupado 990 predios agrícolas... ¡Cuatro ocupaciones por día!

En el campo industrial ocurría lo mismo. En 1969, había habido 23 ocupaciones de industrias por obreros en huelga; en 1970, esta forma de lucha de los trabajadores había elevado a 133 las ocupaciones; y en 1971, en los primeros ocho meses del año, las ocupaciones habían subido a 513 industrias... ¡Un promedio de más de dos ocupaciones diarias!

Para Orlando Sáenz y los directores de la organización de los oligarcas industriales chilenos, esto era una grave señal de que «no se podrá evitar el caos social» tratando de influir en la política económica y social del presidente Salvador Allende. Orlando Sáenz dijo que «nuestros intereses están amagados, y nosotros somos el corazón de la economía nacional, por lo tanto son los intereses de Chile los que están en peligro».

El análisis de la situación, en verdad, era inquietante para el reducido grupo de oligarcas industriales, comerciales y financieros del país (un total de no más de 1000 personas que eran las dueñas de más del 60 % del aparato productivo nacional). Ellos habían aceptado, en principio, influidos por algunos generales de las Fuerzas Armadas, «sacrificar» una parte de su poder económico para «salvar al sistema». Pero los hechos de los pri-

meros once meses de Gobierno de Allende mostraban que aunque el Presidente trataba por todos los medios de cumplir con lo pactado en octubre de 1970 respecto a su programa de transformaciones, la organización popular iba más allá que ellos (no conocía esos compromisos tampoco) y presionaba por el cumplimiento total del programa, que era la «expropiación del poder económico del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional».

Para la Sociedad de Fomento Fabril «ya era tiempo de poner atajo a esta situación». Orlando Sáenz se puso en contacto con Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (organización gremial de los latifundistas) y con Jorge Fontaine, presidente de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (y perteneciente al clan oligárquico de «El Mercurio»). Todos estuvieron de acuerdo, junto con los miembros de los directorios respectivos, que era necesario «poner a Allende contra la pared», partiendo de una campaña gigantesca de publicidad para quitar el apoyo de las masas al Gobierno, y después cambiarlo «constitucionalmente» antes de que cumpliera su período reglamentario de seis años.

Para poner en práctica la ofensiva anti Gobierno, Orlando Sáenz y sus asesores contaban con una realidad económica muy clara que les daba una tremenda capacidad de maniobra:

La Unidad Popular había logrado reducir el ritmo inflacionario (de un 32,5 % en 1970, cerraría con un 20,1 % en 1971) gracias a una política de «reactivación económica» que consistía en el control de precios, la puesta en marcha a toda capacidad del aparato productivo interno, y el alza de sueldos y salarios bajos a niveles superiores al índice de inflación, y de los sueldos altos a niveles iguales al índice de inflación.

Esta reactivación económica llevaba en sí un peligro muy serio, en una economía de estructura monopólica y dependiente como es la chilena. Al llegar a su límite de expansión, si no existía paralelamente una gran acumulación de capital, podía haber desabastecimiento de productos (por el exceso de demanda) y la consiguiente alza de precios vía mercado negro, lo cual volvía a poner el dinero de sueldos y salarios en manos de la oligarquía, como había sido tradicional.

Al mismo tiempo, la política de limitación de precios, al ser hecha teniendo como base los costos de las grandes industrias monopólicas, de mucho mayor productividad, dejaba a éstas con un «margen de ganancias razonables», mientras golpeaba dura-

mente a las pequeñas y medianas empresas, con costos más altos por su menor productividad.

La única salida para este callejón económico, desde el punto de vista del programa de la Unidad Popular, era la constitución de una poderosa área de propiedad social, que traspasara los monopolios en manos privadas al Estado. Con ello se podía cambiar la estructura de producción de todo el sistema (evitando el desabastecimiento), y limitar los precios con los costos de producción de pequeños y medianos empresarios, porque así el «sobreecedente» captado por los monopolios, ya no en manos privadas, sino estatales, podía ser revertido a todo el sistema en forma de mayor acumulación de capital y servicios sociales, mejorando el *status* de los sectores más bajos de la población.

Pero ocurría que el área de propiedad social había sido limitada desde un comienzo en su tamaño, por el compromiso de Allende. Al mismo tiempo, los empresarios privados habían restringido su acumulación de capital (se terminaría 1971 con 11 % de baja en la reinversión privada). Por otro lado, la limitación de precios tenía al borde de la bancarrota a muchos empresarios pequeños y medianos, y ya en septiembre se comenzaba a sentir los efectos del desabastecimiento en todo el sistema y la aparición del mercado negro.

El equipo de la Sociedad de Fomento Fabril planificó entonces, en varios puntos, el modo de destruir la plataforma popular del Gobierno de Allende:

- 1) Impedir por todos los medios la formación del «área de propiedad social» más allá de un límite que la hiciera inocua como directora de la economía nacional. Para ello se encargó a Eduardo Frei que se las arreglara para presentar un proyecto de reforma constitucional en el Parlamento (donde había mayoría de los partidos manejados por la oligarquía y el imperialismo yanqui). La tarea se encargó al senador demócratacristiano Juan Hamilton, en compañía de su colega de partido y de parlamento, Renán Fuentealba. Con esa reforma constitucional se pretendía «congelar legalmente» la formación del «área de propiedad social», nervio motor indispensable de todo el programa de la Unidad Popular.

- 2) Conseguir el apoyo de los pequeños y medianos empresarios (104.000 en el comercio al detalle, 34.000 en la industria y unas 150.000 familias en la agricultura), planteando las banderas de lucha de «mejores precios para los productos», seguridad

contra «las expropiaciones» (cosa que nada tenían que temer por supuesto, estos pequeños y medianos empresarios) y «comercialización» sin control estatal. Todo lo cual beneficiaba doblemente a los monopolios privados.

3) Luchar contra toda forma de organización popular que apoyara al Estado en su control de precios (Juntas de Abastecimientos y Control de Precios), control de la producción (Comités de Vigilancia de la Producción, etc.) y control de las actividades conspirativas de la reacción (Comités de Unidad Popular, que fueron desarticulados por la misma Unión Popular como concesión a la reacción en el período septiembre-octubre de 1970, describiéndolos como «organizaciones del marxismo dictatorial» para «estrangular la democracia»).

4) Promover la restricción en las inversiones privadas y el volcamiento del capital especulativo hacia el mercado negro (en 1972 y 1973 se destinaron más de CIEN MILLONES DE DÓLARES a este negocio por parte de los oligarcas), con el fin de desatar una inflación incontrolada, el consiguiente caos económico y la pérdida total de apoyo de masas al Gobierno.

5) Campaña de propaganda intensiva para demostrar que el quiebre de la economía era «el fracaso del socialismo», ocultando la cuestión central de falta de inversión y de capacidad de planificación y control del propio aparato estatal burgués para resolver la crisis «a favor de los sectores de menores recursos», en vez de hacerlo «a favor del sector monopólico privado chileno y extranjero».

6) Darse un plazo de unos siete a ocho meses (a partir de octubre de 1971, fecha de inicio de la campaña) para llegar a una situación política de deterioro ostensible del apoyo de masas al Gobierno, exigir un plebiscito para que el presidente Allende lo pierda y se rinda a los requerimientos económicos de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de la Producción y el Comercio.

Para poner en práctica estos seis puntos, se contaba con un poder económico y político de la oligarquía casi intacto (habían traspasado a manos del Estado, previo pago de acciones, menos de la cuarta parte de sus empresas), con mayoría en el Parlamento, con influencia total en el Poder Judicial y la Contraloría General de la República; con periódicos que significaban más del 80 % de la circulación diaria en todo el país, con radio-emisoras que concentraban más del 50 % de la sintonía nacional, y con una estación de televisión en Santiago que acaparaba más

del 60 % de la sintonía; por último, también contaban con lo más importante: «la neutralidad de las Fuerzas Armadas».

Los generales «reformistas», a través de Orlando Urbina Herrera y Washington Carrasco, habían hecho saber a Orlando Sáenz y sus asociados, que «si ustedes quieren cambiar de presidente como la Constitución lo permite, con plebiscito, entonces estamos de acuerdo, no entrabaremos esa acción». Los generales «constitucionalistas», a través de Augusto Pinochet, habían hecho saber lo mismo. Y los generales «duros» apoyaban el plan porque tenía que ver exactamente con lo que ellos planteaban desde septiembre de 1970.

Sin embargo, los generales «reformistas» insistieron en que ellos estimaban que «había un error de apreciación» en lo acordado por la Sociedad de Fomento Fabril. Que todavía no era tiempo «de entrar en temores», que la capacidad de Allende, su «muñeca política» como él mismo la llamaba, no estaba agotada para «calmar a los trabajadores y hacerlos entrar en razón».

Los dirigentes políticos del Partido Nacional, encabezados por Onofre Jarpa y los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, más los diputados Patricio Phillips y Fernando Maturana y el grupo de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, compuesto principalmente por su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, los senadores Juan Hamilton y Patricio Aylwin y el empleado del grupo Yarur-Rockefeller, Felipe Amunategui Stewart, son los que recibieron el encargo de la Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, de poner en marcha la campaña.

El día primero de octubre de 1971, la Sociedad de Fomento Fabril abrió el fuego al publicar un comentario sobre la gestión de la Unidad Popular, dando «un balance sobre los resultados alcanzados: el Gobierno profundamente afectado en su prestigio y expuesto a un juicio político; importantes sectores industriales vejados y damnificados en sus derechos; una opinión pública desconcertada y perpleja; y lo que es peor: ninguno de los objetivos buscados logrados».

### *Las ollas vacías*

En noviembre de 1971 ya estaban desatados todos los efectos de desabastecimiento producidos por la redistribución de ingre-